



Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de
Salud y Políticas Sociales

Ref: SG/146/2025

Ref Abc: 860-2022/078549

En relación con su solicitud de informe, con fecha de entrada en esta Dirección General el día 6 de marzo de 2025, sobre el anteproyecto de ley de Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja, esta Dirección General, informa, desde el punto de vista jurídico, lo siguiente:

I.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTEPROYECTO.

a) Competencia de la Comunidad Autónoma.

La competencia de la Comunidad Autónoma constituye el primer y esencial presupuesto para la validez de cualquier clase de disposición, tanto legal como reglamentaria, que pretendan dictar sus órganos.

La Comunidad Autónoma de La Rioja ostenta competencia para la tramitación del anteproyecto de ley informado en aplicación del artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, en cuya virtud, *corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución las siguientes materias: 5. Sanidad e higiene y 12. Ordenación farmacéutica*

En definitiva, con base, en este título competencial, podemos justificar la competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja para iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley como el que se informa.

b) Objeto de la norma.

La norma proyectada tiene por objeto, como resulta del artículo 1 del borrador que informamos, la regulación de la atención farmacéutica a la ciudadanía y la ordenación de los establecimientos, servicios y depósitos farmacéuticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El borrador de disposición está compuesto por una parte expositiva y sesenta y cuatro artículos, once disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2025/0254062
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Letrada Mayor			
2				

c) Cumplimiento de trámites.

La disposición proyectada debe ajustar su procedimiento de elaboración a lo establecido en los artículos 32 bis y siguientes de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En cumplimiento de esta normativa se han seguido los siguientes trámites:

1.- Según la resolución de inicio de 4 de julio de 2022, el procedimiento se inicia por medio de una consulta previa. Ésta se practicó entre los 5 de mayo a 6 de junio de 2022, ambos inclusive, sin embargo, no constan aportaciones al borrador remitido.

2.- Con fecha 26 de septiembre de 2024 se elabora una memoria justificativa desde la Dirección General de Prestaciones y Farmacia.

3.- La diligencia de formación del expediente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales es de fecha 1 de octubre de 2024.

4.- Según el certificado de 25 de octubre 2024, del Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, el trámite de información pública se practicó entre los días 4 a 24 de octubre con el resultado que obra en las actuaciones.

5.- El Consejo Riojano de Salud informó el anteproyecto de ley en su sesión de 25 de enero de 2025, esta obligación resulta del Decreto 29/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan los órganos de participación ciudadana en el Sistema Público de Salud de La Rioja.

6.- Con fecha 16 enero de 2025, emite informe el Servicio de Organización, Innovación y Evaluación de los Servicios Públicos e aplicación del artículo 4.2 a) del Decreto 125/2007, de 26 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de organización administrativa, calidad y evaluación de los servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

6.- El dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja tendría carácter facultativo.

Como prevé el artículo 39 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, concluidas las actuaciones de la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación elaborará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes resultantes de los trámites de consulta previa,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 2 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

audiencia e informes preceptivos, así como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. La memoria deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al ordenamiento jurídico del texto del anteproyecto.

II.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO.

Examinado el concreto articulado del anteproyecto de ley, esta Dirección General informa lo siguiente:

1.- El artículo 2.f) define el concepto oficina de farmacia. La definición de oficina de farmacia y su objeto, lo encontramos, a su vez en los artículos 86 y ss de la Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, según la disposición final primera del Real Decreto Legislativo, los artículos 87 a 90, *tienen la condición de legislación sobre productos farmacéuticos y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución*, por su parte, el artículo 86 tiene la condición de normativa básica y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Se somete a consideración del órgano gestor la necesidad de conservar esta definición cuando ya está incluida en los preceptos señalados dictados por la Administración del Estado con base en los títulos competenciales señalados.

2.- La misma aseveración cabe hacer en lo que afecta a la definición de *almacén mayorista* letra v) y de *almacén por contrato* de la letra w) del artículo 2 proyectado, la definición de distribución mayorista de medicamentos y almacén por contrato se contiene en la letra p) y q), respectivamente, del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, legislación sobre productos farmacéuticos según la citada disposición final primera.

3.- El artículo 4.3 del anteproyecto proyectado regula *la actividad de distribución de medicamentos de uso humano*, esta cuestión se regula en el artículo 1 del Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano y, especialmente, en el artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, este concreto precepto, se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Pues bien, sin perjuicio de dar por reproducido el punto anterior, se considera procedente poner este precepto en relación con la doctrina de las *leges repetitae*, o reproducción de normas dictadas por otras administraciones, normalmente, la estatal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 3 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

Esta práctica puede implicar vulneración de competencia cuando opera por una administración que carece de competencia para dictarlas por sí mismo, aunque se limite a parafrasear o reproducir literalmente lo establecido en aquellas.

Se considera oportuna la cita a la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2019 de 11 abril (RTC 2019\51) que reproduce en parte la STC 341/2005 (RTC 2005, 341), FJ 9, cuando recuerda que cabe distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las autonómicas, de los que se derivan consecuencias distintas:

El primer supuesto se produce cuando la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto el Estado como la comunidad autónoma. El segundo tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas relativas a materias en las que la comunidad autónoma carece de competencias. Pues bien, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, mientras que en el segundo la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal (salvo supuestos excepcionales como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo), en el primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso concreto".

Con este punto de partida, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 2019 establece una pauta de actuación:

Para hacer esa valoración, y sistematizando la jurisprudencia recaída en la materia, podemos afirmar hoy que en los casos de alegación de la doctrina de las leyes repetitae, es preciso, en primer lugar y al igual que ocurre en general en los supuestos de inconstitucionalidad mediata, confirmar que la normativa que se pretende reproducida ha sido efectivamente dictada en ejercicio de una competencia estatal, ya sea exclusiva —lo que dará lugar a un canon más estricto de enjuiciamiento de la regulación autonómica reiterativa—, ya sea compartida con las comunidades autónomas, pero correspondiente al Estado.

Realizada esa comprobación, será necesario verificar que la reiteración de la normativa estatal por el legislador autonómico satisface dos condiciones necesarias para ser admisible desde el punto de vista constitucional. Por un lado, debe concurrir un elemento finalista que justifique la necesidad de esa reproducción, que solo podrá tener un sentido instrumental: hacer más comprensible el desarrollo normativo que realiza la comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias propias. Como afirma la STC 47/2004, FJ 8, recogida en otras posteriores como la STC 341/2005, FJ 9, o la 201/2013, de 5

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 4 / 11
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

de diciembre (RTC 2013, 201) , FJ 11, la reiteración se debe aprobar "con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico". De esta forma, como señalamos en la STC 73/2016, FJ 10, "la legislación autonómica puede introducirse en el terreno de lo básico, pero solo por excepción, cuando se limite a repetir las bases y únicamente si de ese modo contribuye a hacer inteligible el régimen autonómico de desarrollo". No sería por ello aceptable que la reproducción de las bases estatales pretendiese simplemente refundir en un único texto normativo toda la regulación aplicable en una materia (bases y desarrollo), aunque fuese con la intención de facilitar su uso al aplicador del derecho, porque daría la impresión equivocada de que el legislador autonómico ha asumido la competencia sobre la totalidad de una regulación, como si fuese autor de un sistema normativo completo, cuando en realidad está engarzado en el marco más amplio del ordenamiento del Estado, al que complementa. De hecho, en los casos en los que esa recepción instrumental de la normativa estatal sea posible, no por ello podrá entenderse que las prescripciones insertadas pasen a ser legislación autonómica dictada en ejercicio de una competencia propia —eso sería una apropiación competencial inadmisibile—, sino prescripciones básicas estatales presentes en esa legislación, de manera que su reforma o supresión estará subordinada a la modificación o derogación de la correspondiente normativa básica por el Estado. Se trata, por tanto, de normativa vinculada a las bases que reproducen, que si bien no queda formalmente alterada cuando aquellas se modifican, sí lo son materialmente, e incurrirán en inconstitucionalidad sobrevenida si no se acomodan por el legislador autonómico al nuevo contenido de las bases tras su reforma.

Por otro lado, será también necesario, como condición material, que la reproducción de la normativa básica sea fiel y no incurra en alteraciones más o menos subrepticias de la misma, efecto que puede producirse bien por recogerla solo de modo parcial (caso de las SSTC 154/1989, de 5 de octubre (RTC 1989, 154) , FJ 6; 62/1993, FJ 4, que al detectar una "reproducción parcial, con omisiones muy significativas", apreció una contradicción por defecto, y no por exceso, con la norma básica del Estado respecto a las causas de incompatibilidad de determinados cargos de las cajas de ahorro; 18/2011, FJ 18, o 62/2017, de 25 de mayo (RTC 2017, 62) , FJ 7), bien por parafrasear la regulación estatal en términos que introduzcan confusión (como ocurrió en el primero de los preceptos examinados en el fundamento jurídico 7 de la citada STC 62/2017). En particular, hemos advertido que "omitir [una condición básica] puede ser en ocasiones tanto como contradecir" (STC 172/1996, FJ 2), sobre todo "cuando a resultas de una omisión, sea parcial o completa, la norma autonómica contenga en sí misma y por consecuencia una regulación contraria a la ley básica estatal" (STC 73/1997, FJ 4). En definitiva, el legislador autonómico no puede, con ocasión de su desarrollo, reformular las bases estatales, pretendiendo incidir en su eficacia en su territorio [STC 73/2016, FJ 9, y 8/2018, FJ 3 f)], sino que su recepción de la misma ha de ser, además de instrumental o auxiliar, fidedigna.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 5 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

(...)

De acuerdo con la doctrina de las *leges repetitae* que venimos aplicando en esta sentencia, entendemos que la reproducción de esos contenidos estatales básicos que, en general, como técnica normativa debe ser evitada por los peligros que comporta, puede tener sentido cuando respetándose los términos de la normativa básica se hace una utilización de aquella para hacer comprensible la normativa de desarrollo, sin ánimo de generar un texto refundido de bases estatales y desarrollo autonómico que no está previsto en nuestro sistema constitucional de reparto de competencias porque supone en la práctica una usurpación del espacio normativo que corresponde al Estado en una suerte de conmixión de competencias.

(Los subrayados son nuestros).

Por lo expuesto, se somete a consideración del órgano gestor la necesidad de conservar este precepto, pues la reproducción solo tendría sentido si viene a hacer inteligible la norma proyectada, lo que parece cuestionable, a la luz de la regulación estatal citada.

4.- La misma indicación puede ser hecha respecto de varios de los apartados del artículo 6 proyectado, funciones de las oficinas de farmacia que reproducen el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia (bien es cierto que, la disposición final primera de la norma no confiere al artículo 1 el carácter de legislación básica del Estado sobre sanidad, dictada al amparo del artículo 149.1.16. de la Constitución).

5.- En el artículo 19.4d) del borrador proyectado, se prevé que *la Dirección General competente comprobará las distancias según los criterios aplicados en virtud de normas anteriores, los establecidos en esta ley y los que se desarrollen reglamentariamente.*

Debería especificarse que se entiende por normas anteriores, sustituyendo esta expresión por una cita expresa para garantizar la seguridad jurídica y poder comprobar su vigencia.

6.- En las letras b) y c) el artículo 21.3 sobre adjudicación de la nueva oficina de farmacia y autorización de las instalaciones de la nueva oficina de farmacia, respectivamente, se recomienda incluir el sentido del silencio en caso de que la Administración no resuelva en, en los plazos establecidos, cada uno de los procedimientos de adjudicación y autorización.

Esta misma recomendación se extiende al artículo 27 sobre transmisión de oficinas de farmacia.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 6 / 11
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Letrada Mayor		
2			

En el apartado 7 del artículo 23, se sugiere al órgano gestor una redacción alternativa. Así donde indica que, el farmacéutico titular o cotitular no podrá transmitir la oficina de farmacia o su porcentaje de participación desde el momento en que se haya presentado como concursante en un procedimiento de autorización de una nueva oficina de farmacia hasta que no proceda contra la resolución de adjudicación ningún recurso en vía administrativa y, en su caso, hasta la resolución firme en la vía jurisdiccional. Se sugiere, el farmacéutico titular o cotitular no podrá transmitir la oficina de farmacia o su porcentaje de participación desde el momento en que se haya presentado como concursante en un procedimiento de autorización de una nueva oficina de farmacia hasta que la resolución de adjudicación sea firme en vía administrativa o, en caso de interponerse recurso ante los Tribunales de Justicia, hasta la resolución firme en la vía jurisdiccional.

Por su parte, se somete a consideración del órgano gestor que los efectos del apartado 8 de este mismo artículo se produzcan, no solo desde la fecha en que se produzca la autorización de la adjudicación de la nueva oficina de farmacia, como está previsto, sino, como en el apartado anterior, desde la firmeza de la autorización de la adjudicación de la nueva oficina de farmacia.

7.- Esta referencia de firmeza de autorización puede utilizarse también en el artículo 24.4 proyectado.

8.- En el artículo 26.4, podemos leer *no obstante, el farmacéutico titular que haya obtenido la oficina de farmacia por concurso, independientemente de la población del municipio, no podrá transmitirla hasta transcurridos diez años desde la autorización de su apertura, salvo que esta se produzca por alguna de las situaciones detalladas anteriormente*, en cuyos casos podrá realizarse en cualquier momento.

En aras a garantizar el recto entendimiento del precepto, se sugiere sustituir la palabra anteriormente, por en el párrafo anterior, en el párrafo primero de este apartado, u otra similar.

9.- En el artículo 28.2 se establece que *en caso contrario, la Dirección General competente resolverá la caducidad del derecho de continuidad concedido y la correspondiente transmisión o cierre de la oficina de farmacia*.

Se somete a consideración del órgano gestor la posibilidad de ampliar los plazos que reglamentariamente se establezcan para el caso excepcional de que concurra justa causa o fuerza mayor que impida al heredero que está cursando estudios farmacéuticos finalizarlos en tales plazos reglamentarios.

10.- Para facilitar la lectura y comprensión del artículo 29.6 y, en cumplimiento de las Directrices de técnica normativa, se recomienda enumerar los diversos supuestos de cierre forzados de oficinas de farmacia por letras.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 7 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

En efecto, según la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, apartados 32 y 33:

En el caso de que la enumeración sea una lista o relación formada únicamente por sintagmas nominales, cada ítem podrá iniciarse con minúscula y acabar con una coma, excepto el penúltimo, que acabará con las conjunciones «o» o «y», y el último, que, de no haber cláusula de cierre, acabará con punto y aparte.

33. Letras de las subdivisiones. En la ordenación de párrafos con letras minúsculas, se usarán todas las letras simples del alfabeto, incluidas la «ñ» y la «w», pero no los dígrafos «ch» y «ll»

11.- En el artículo 32.3 g) del anteproyecto se encomienda a los servicios de farmacia de atención primaria realizar actividades de información y formación sobre medicamentos y productos sanitarios a profesionales de la salud y a la ciudadanía de La Rioja, esta actividad de información y formación debería circunscribirse al área territorial de actuación de los concretos servicios de atención primaria en atención a lo señalado en el artículo 49.3 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud según el cual

Los Centros de Salud y los Consultorios Locales y Auxiliares de Salud constituyen las estructuras físicas de las Zonas Básicas de Salud, donde presta servicio el conjunto de profesionales que integran los Equipos de Atención Primaria

12.- En el artículo 36 sobre la adquisición de medicamentos, se prevé que ésta se efectuará: a) En el caso de los servicios de farmacia hospitalaria, por el farmacéutico responsable del servicio de farmacia hospitalaria o bajo su supervisión, a través de cualquier entidad legalmente autorizada para fabricar, intermediar o distribuir medicamentos, se recomienda incluir que esta atribución se desarrollará por los procedimientos de contratación legalmente establecidos.

13.- El artículo 57.2 prevé que el instructor aprecia que las infracciones pueden ser constitutivas de delito, lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente, solicitándole testimonio sobre las actuaciones que practique en su caso, en este párrafo se recomienda indicar que las actuaciones podrán ser puestas también en conocimiento del Ministerio Fiscal; sobre esta base, se sugiere la siguiente redacción: el instructor aprecia que las infracciones pueden ser constitutivas de delito, lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente o el Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones que practique en su caso.

A mayor abundamiento, se recomienda incluir un apartado en el párrafo o un párrafo independiente con una redacción similar a la que se sugiere: La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 8 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales		2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones			Fecha/hora
1 Letrada Mayor				
2				

tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción.

14.- Se recomienda completar el artículo 57.4 indicando que la suspensión será comunicada al interesado.

15.- En lo que afecta al catálogo de infracciones del artículo 58 se realizan las siguientes consideraciones:

- En el artículo 58.2.b) tipifica como infracción leve *la negativa a suministrar datos o a facilitar la información solicitada por la Administración sanitaria*, por su parte, el artículo 58.3.a) tipifica como infracción grave *dificultar o impedir la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma*.

Se recomienda delimitar con mayor precisión estos preceptos, pues la negativa a suministrar datos o a facilitar información solicitada, bien puede entenderse incluida en la letra a) del artículo 58.3 proyectado.

16.- En el artículo 58.2.d) se cataloga como leve la siguiente infracción *El incumplimiento del deber de garantizar la confidencialidad de los datos personales, en especial de los referentes al estado de salud y a los medicamentos y productos sanitarios dispensados a la ciudadanía, o el incumplimiento del deber de guardar el debido secreto profesional*.

Se somete a consideración del órgano gestor la revisión de esta tipificación, en concreto, de su graduación, pues por ejemplo, en lo que afecta a la vulneración del deber de confidencialidad, el artículo 72 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cataloga esta infracción de muy grave, así, podemos leer:

i) La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica (1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento)

17.- Para distinguir las infracciones leves y graves de los apartados 2 y 3 del artículo 58, se recomienda modificar la redacción del artículo 58.3.c) por una similar a *El incumplimiento reiterado de los requerimientos de la Administración sanitaria*.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 9 / 11
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

18.- El artículo 58.2, .3 y .4 considera infracción, leve, grave o muy grave respectivamente en las letras o), p) y g) cualquier infracción que tenga la calificación de infracción leve, grave o muy grave en la normativa específica aplicable en cada supuesto.

No parece que sea necesario introducir este inciso cuando existen otras normas que ya tipifican la infracción correspondiente, además en la redacción propuesta, el precepto sancionador es indeterminado y, por ende, susceptible de generar problemas de tipicidad (en este sentido, el artículo 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público recuerda que *sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley*).

19.- La disposición adicional quinta del anteproyecto, en su apartado segundo prevé la posibilidad de delegar en el COF la organización del horario ordinario, entendemos que esta intervención se ha de hacer en la forma que dispone la Ley 4/1999, de 31 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja, en concreto, en su artículo 4. Relaciones con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se prevé que

3. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá encomendar a los Colegios Profesionales la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su propia competencia, por razones de eficacia o cuando no posea medios técnicos idóneos para su desempeño. Esta encomienda de gestión deberá formalizarse mediante la firma del correspondiente convenio.

La expresada encomienda deberá publicarse en el «Boletín Oficial de La Rioja» y determinará el alcance, contenido, duración y condiciones de la misma. El Gobierno de La Rioja podrá dictar instrucciones de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión colegial, así como enviar comisionados y formular los requerimientos correspondientes. El Gobierno de La Rioja se reservará, en todo caso, la revocación de la gestión encomendada.

4. La Comunidad Autónoma de La Rioja y los Colegios Profesionales podrán suscribir convenios de colaboración para la realización de actividades de interés común, y para la promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público, y, en especial, de los usuarios de los servicios profesionales de los colegiados

En coherencia con este precepto, el artículo 6 de los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, le encomienda, entre otras l) *Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración* (<https://www.cofrioja.org/pdfs/Estatutos.pdf>).

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 10 / 11
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			

La previsión general del artículo 4.4 de la Ley 4/1999, de 31 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja recomienda igualmente, suprimir el apartado primero de esta disposición, pues la posibilidad de suscribir convenios con Colegios Profesionales, ya está prevista en su propia norma reguladora.

20.- La disposición adicional décima proyectada regula los plazos de resolución de los procedimientos, sin embargo, en aras a garantizar la seguridad jurídica, se recomienda introducir estos plazos en cada uno de los procedimientos correspondientes, como se hace, por ejemplo, en los artículos 21 (autorización de nuevas oficinas de farmacia) o 27 (supuestos de transmisión).

III.- CONCLUSIONES.

1. – La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular la materia tramitada en este anteproyecto de Ley. El rango de la norma también es el adecuado.

2.- En lo afecta al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley, es conforme con lo dispuesto en los artículos 32.bis y siguientes de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

3.- En cuanto al concreto articulado del anteproyecto, podrán tomarse en consideración las manifestaciones vertidas en el apartado II.- de este informe.

Es cuanto ha de informarse al respecto, sin perjuicio de mejor criterio en derecho. No obstante, V.I. resolverá.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 11 / 11
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2022/078549	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0254062
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Letrada Mayor			
2			